



**VISTOS**, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo indirecto **14/2022-I** (anterior 18/2021 del 2TU), promovida por \*\*\*\* \*\*\*\*\* por conducto de su defensor particular, contra actos de la Magistrada del extinto Primer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California y,

## RESULTANDO:

## PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo.

Mediante escrito presentado el **dieciocho de octubre de dos mil veintiuno**, en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, recibida por cuestión de turno en esa misma fecha en el extinto Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, en la misma ciudad, el defensor particular del imputado \*\*\*\* \*, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad siguiente:

### ***“III. AUTORIDAD RESPONSABLE:***

- *Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, y con domicilio conocido en esta ciudad.*

**IV. LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA:**

- La resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno (23-septiembre-2021), dictada en el Toca Penal \*\*\*\*\* , del índice de la responsable, mediante la cual **confirmó** la diversa resolución de siete de agosto del año en curso, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en la que dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal \*\*\*\*\* , en contra del imputado \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , por el hecho que la ley señala como delito **contra la biodiversidad, en la modalidad de poseer ejemplares de una especie acuática sujeta a protección especial**, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, y el diverso ilícito de **delincuencia organizada, en su modalidad de cometer delitos contra el medio ambiente**, previsto en la fracción X, del artículo 2, y sancionado en el inciso b), de la fracción II, del numeral 4, todos de

**SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto en el extinto Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito.** Por auto de **diecinueve de octubre de dos mil veintiuno**, el Secretario en funciones de Magistrado del extinto Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede Mexicali, Baja California, registró la demanda de amparo indirecto con el número **\*\*\*\*\***; la admitió a trámite; solicitó informe justificado a la autoridad responsable; fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; y reconoció el carácter de terceros interesados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con sede en la ciudad de Mexicali, Baja California y agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula V-6 UEITMPO, con residencia en Ciudad de México.

Seguido el trámite correspondiente, recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrada del extinto Primer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, así como copia auténtica de los registros contenidos en la carpeta judicial **\*\*\*\*\***, remitidos por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali.

VERONICA LIZBETH AGUA YO GOMEZ TELLO  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.35.30.33.36.36.31.36.34.3  
26/03/24 14:26:36



## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En proveído de **veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno**, se tuvo al defensor particular del quejoso \*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , interponiendo recurso de revisión; el **treinta y uno de diciembre siguiente**, se remitieron los autos originales al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, Baja California, para su substanciación, el cual por razón de turno tocó correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mismo que se registró con el número de amparo en revisión penal \*\*\*\*\*.

**TERCERO. Recepción del asunto en este Tribunal Colegiado de Apelación.** El doce de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con el Acuerdo General **42/2022** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación denominación e inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad; así como al Acuerdo General **41/2022** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Tribunales Unitarios **Primero, Segundo, Séptimo y Décimo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana y Mexicali, Baja California**, entre otras cosas, señala que los referidos Tribunales Unitarios remitirían los asuntos de su índice a **este Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, de esta ciudad**; se tuvo por recibido el juicio de amparo indirecto **18/2021**, el cual se turnó a la ponencia I, a cargo de la suscrita magistrada instructora; se registró con el número **14/2022-I**, se ordenó notificar a las partes para que en su caso, plantearan como causa de recusación cualquiera de los impedimentos señalados en los artículos 126, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 51, de la Ley de Amparo.



Además, se agregó el oficio **12930/2022** y anexos, provenientes del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual devolvió el juicio de amparo **14/2022-I**, anteriormente **18/2021** y remitió testimonio autorizado de la ejecutoria de **dos de diciembre de dos mil veintidós**, pronunciada en el amparo en revisión penal **\*\*\*\*\***, en la que se resolvió lo siguiente:

**“PRIMERO. Se *REVOCA* la sentencia recurrida.**

**SEGUNDO. Se ordena *REPONER EL PROCEDIMIENTO*.”**

En acatamiento a lo anterior, se repuso el procedimiento a partir del auto de **veinticinco de octubre de dos mil veintiuno**, para el efecto de que se notificara ese proveído de forma personal al quejoso **\*\*\*\* \*\*\*\*\***, en el lugar de su reclusión, en el que se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Magistrada del extinto Primer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, así como con las constancias remitidas por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali.

Además, se tuvo a la Magistrada instructora **Edna María Navarro García, como autoridad responsable sustituta del extinto Primer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito**, en virtud de que el toca penal el cual deriva el acto reclamado, se retornó a su ponencia, con el número **\*\*\*\*\*** anteriormente **\*\*\*\*\***.

Asimismo, se giró despacho al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con sede en Mexicali, para que encomendara notificar al quejoso en el Centro de Reinserción Social, con sede en esa ciudad, el auto de **veinticinco de octubre de dos mil veintiuno**, así como el diverso de **doce de enero del año en curso**, el informe



justificado rendido por la autoridad responsable, las constancias remitidas por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali y la ejecutoria de amparo dictada en el amparo en revisión penal

\*\*\*\*\*

Notificadas las partes sin que hicieran valer alguna causa de impedimento, ni realizaran manifestación alguna, se celebró la audiencia constitucional, quedando el asunto para dictar sentencia; por lo que se procede a emitir la siguiente resolución.

## CONSIDERACIONES:

**PRIMERA. Competencia.** La suscrita magistrada instructora de este Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, soy competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 24/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la integración, organización y funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Apelación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós y diverso 42/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, así como su competencia, jurisdicción territorial, y domicilio; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número,

ado en e  
ore de do  
un juicio

el Decimo  
actualme  
strada ins  
este Trib  
localidad

presente asunto con lo  
al 24/20  
que reglar  
los Tribu  
Oficial c  
ntidós.

ornia, su  
lpa, Marí





constancias, remitidas por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, consistentes en copia auténtica de los registros contenidos en la carpeta judicial \*\*\*\*\* (fojas 439 a 652 del tomo I); constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de actuaciones expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, atento lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y con aplicación de la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Apéndice de 1995, tomo VI; Parte SCJN, registro 394182, Quinta Época, de rubro y texto:

***“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.”***

**CUARTA. Causas de improcedencia.** Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe analizarse de oficio, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo, por así disponerlo el numeral 62 de dicho ordenamiento legal.

En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia II.1o. J/5,, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95 del Tomo VII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

***“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por***





**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”

1. Aspectos generales del auto de vinculación a proceso;
2. Análisis de oficio de los requisitos constitucionales y legales del acto reclamado; y
3. Estudio de los conceptos de violación.



**1. Aspectos generales del auto de vinculación a proceso.**

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que para el dictado del auto de vinculación a proceso se requiere la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, es decir, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad.

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la **contradicción de tesis 87/2016**, determinó que el sistema penal ya no prevé un “acreditamiento” del cuerpo del delito, sino el “establecimiento” de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito.

En dicha ocasión, la propia Sala explicó que el Juez de Control, para dictar dicho acto de molestia, no está obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la ley penal como delitos. De las anteriores consideraciones, derivó la tesis **1a./J. 35/2017**, que dice:

**“AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del**



VERONICA LIZBETH AGUAYO GOMEZ TELLO  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.33.36.36.31.36.34.33.  
26/03/24 14:26:36



*de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley”.<sup>1</sup>*

Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone en su artículo 316 que el Juez de Control, para el dictado del auto de vinculación a proceso, deberá de considerar los requisitos siguientes:

- a) Se haya formulado la imputación;
- b) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;
- c) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y
- d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 35/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

**“AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).** Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación,

<sup>1</sup> Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 360, registro: 2014800.

el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que





*sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.”<sup>2</sup>*

En ese contexto, **el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso**, atendiendo a los principios que rigen en el sistema penal acusatorio y conforme al estándar probatorio de esa etapa. Por tanto, el análisis del presente asunto se realizará a partir de los registros que remitió el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y de las constancias que remitió la Magistrada responsable; lo anterior, sin sustituir la función de la responsable, solo analizar la legalidad de la ponderación, es aplicable:

**“VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN.** Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de

<sup>2</sup> Jurisprudencia con registro digital 2014800, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 45. Agosto de 2017, Tomo I, página 360.

VERONICA LIZBETH AGUA YO GOMEZ TELLO  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.35.30.33.36.36.31.36.34.3  
26/03/24 14:26:36

# Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

<sup>3</sup> Registro digital: 2022178. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 28/2020 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79. Octubre de 2020, Tomo 1, página 260, Tipo: Jurisprudencia.





**“Artículo 19.** Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión...”.

## Código Nacional de Procedimientos Penales

### **“Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso**

El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:

- I. Se haya formulado la imputación;
- II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;
- III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y
- IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.”

En esa medida, quien resuelve estima que, como de forma correcta lo determinó la Magistrada responsable, el juez de Control observó los requisitos legales para dictar el auto de vinculación a proceso, toda vez que de las constancias audiovisuales que allegó el Administrador del Centro de Justicia



**I. Formulación de imputación.** En la audiencia inicial el Fiscal formuló imputación, haciéndole saber a \*\*\*\*\*, el hecho que se le atribuye.<sup>4</sup>

Lo anterior, atento a las consideraciones plasmadas en la contradicción de tesis **212/2016**, sustentada por la Primera Sala del alto tribunal, de la cual derivó la tesis 1a. CXCIX/2017 (10a.) con rubro y texto:

**“IMPUTACIÓN Y SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO. SUS DIFERENCIAS.** *Aun cuando las actuaciones de Imputación y solicitud de vinculación a proceso provienen del Ministerio Público y tienen verificativo en la audiencia inicial, no*

VERONICA LIZBETH AGUA YO GOMEZ TELLO  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.35.30.33.36.36.31.36.34.3  
26/03/24 14:26:36



**II. Oportunidad para declarar.** El Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, actuando en funciones de juez de Control otorgó al imputado \*\*\*\* \*, la oportunidad para que rindiera su declaración, a lo que el aquí quejoso se reservó su derecho a declarar.<sup>6</sup>

Después, el fiscal solicitó que se dictara vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito contra la **biodiversidad**, en la modalidad de **poseer ejemplares de una especie acuática sujeta a protección especial**, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal y procedió a justificar tal petición, con los datos que a continuación se citan:

- **Informe policial homologado** con terminación  
\*\*\*\*\* de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno,

<sup>5</sup> Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2015729, Libro 49, diciembre de 2017. Tomo 1, página: 421, materia: Penal.

<sup>6</sup> Minuto 26:10, video 1 parte 2.

● **Acta circunstanciada de cateo** del inmueble ubicado

\*\*\*\*\* , con las coordenadas que en la misma se precisan.<sup>8</sup>

se autorizó la ejecución del cateo en el domicilio de \*\*\*\*

\*\*\*\*\* 9

con número de folio \*\*\*\*\*, de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, signado por Rosa Juliana Pérez Sahagún perito adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Correspondiente al cumplimiento de la técnica de investigación número \*\*\*\*\* de fecha \*\*\*\*\* de este año y que en la esencia refiere los hechos de cómo se llevaron a cabo desde dentro del domicilio perteneciente al señor \*\*\*\*\*, que tiene como referencia que dicho domicilio se trata de una tienda de abarrotes y carnicería llamada \*\*\*\*\* (minuto 31:21, video 1 parte 2)

9 Que era con la finalidad de la línea de investigación señalada por el solicitante, advirtiéndose la existencia de indicios que hacen presumir razonablemente que existe un alto grado de probabilidad de que en los citados domicilios se realizan actos relacionados con delincuencia organizada para cometer delitos contra el medio ambiente y contra la salud, y en específico en esos domicilios, se ubica el señalado en el que habita el señor \*\*\*\* que es el inmueble ubicado en \*\*\*\*, con las coordenadas ya precisadas (minuto 33:19, video 1 parte 2).

10 Mediante el cual concluyó que se constituyó en compañía de perito en materia de criminalística de campo, perito en materia de delitos ambientales y elementos de policía federal ministerial, al inmueble ubicado en \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, lugar donde se lleva a cabo la documentación fotográfica del exterior e interior del inmueble, la cual consiste en una casa de dos plantas, en la cual la planta baja se encuentra habilitada como local comercial denominado como abarrotes \*\*\*\*\*, tres indicios identificados alfanuméricamente como C1, C2 y 3, los cuales presentan en sus etiquetas las siguientes leyendas: indicio C1, ejemplares de pepino de mar, aproximadamente de 1 kilo 635 gramos congelado. indicio C2 3 ejemplares de pepino de mar. indicio 3. 2 libretas portada negra leyenda





- **Dictamen en la especialidad de criminalística forense** de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno con número de folio **\*\*\*\*\***, signado por Estefanía Blancas Mondragón, perito adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales.

- **Diligencias que se llevaron a cabo por parte de los elementos de la Policía Federal Ministerial junto con elementos de la agencia Ministerio Público de la Federación**, refiriendo que al momento de su intervención se encontraron personas en el interior del inmueble, las cuales en todo momento presenciaron la diligencia.<sup>12</sup>

• **Dictamen de la especialidad en delitos ambientales** de fecha \*\*\*\*\* \* \*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\*\*\* , con número de folio \*\*\*\*\*, signado por Marisol Ferreira Ramírez, perito en materia de delitos ambientales de la Coordinación General de Servicios Periciales.<sup>13</sup>

Asimismo, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó que se dictara vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de **delincuencia organizada**, en su modalidad de **cometer delitos contra el medio ambiente**, previsto en la fracción X del artículo 2, sancionado en el inciso b), de la fracción II, del numeral 4, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y procedió

fighterwing, portada de diversos colores con la leyenda start kit, así como un total de 88 archivos fotográficos en formato jpg, del desarrollo de la diligencia de cateo, que se adjuntan a un disco DVD (minuto 34:13, video 1 parte 2).

<sup>11</sup> Mediante la cual refiere, en su parte conducente, la descripción del lugar de intervención que se realizó de manera ordenada y sistemática, la búsqueda y localización de los indicios, en compañía de la Policía Federal Ministerial y del Ministerio Público de la Federación, y en el que se habla sobre los indicios C1 y C2, que fueron procesados por el perito en materia de delitos ambientales, referentes al pepino de mar y los registros de cadena de custodia (minuto 36:16, video 1 parte 2).

<sup>12</sup> Minuto 37:21, video 1 parte 2.

13 En el que concluyó como primer punto, que los indicios C1 y C2 son ejemplares marinos, que pertenecen a la especie conocida comúnmente como pepino de mar, pepino de mar café, pepino de mar gigante, de nombre científico *isostichopus fuscus*, el cual se distribuye en el Golfo de California, Ecuador, Galápagos, Isla Socorro, Isla del Coco, Costa Rica, El Salvador, Colombia y Panamá; y, como segunda conclusión, dijo que en cuanto a la normatividad aplicable a los indicios C1 y C2, pertenece a la especie ya referida, se determina que su aprovechamiento se encuentra regulado por la norma oficial mexicana NOM 059 SEMARNAT 2010 bajo la categoría de riesgo amenazada (minuto 37:45, video 1 parte 2).

a justificar tal petición, con los datos que a continuación se citan:

- **Copia de la técnica de investigación** número \*\*\*\*\* de fecha veintiocho de julio dos mil veintiuno, en donde se autorizó la orden de cateo en el domicilio ubicado en \*\*\*\*\* en \*\*\*\*\* en \*\*\*\*\* , con coordenadas geo referenciales latitud \*\*\*\*\* longitud - \*\*\*\*\* .<sup>14</sup>

- **Acta circunstanciada de cateo** del inmueble ubicado en \*\*\*\*\* número \*\*\*\*\* ya referido, relativo a la orden de cateo autorizada mediante la técnica de investigación \*\*\*\*\* , en que se destacó principalmente la existencia de pepino de mar; así como, la existencia de una libreta marcada como indicio 3, con anotaciones que hacen referencia a nombres como \*\*\*\*, \*\*\*\*\* y pedidos de buche de Totoaba.

- Oficio \*\*\*\*\* de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, dirigido al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, quien se encuentra a cargo de la carpeta de investigación \*\*\*\*\* , que originó la autorización de la técnica de investigación \*\*\*\*\* .<sup>15</sup>

- Oficio \*\*\*\*\* de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, signado por el agente Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad

<sup>14</sup> De la cual se desprende, según lo manifestado por la fiscalía, que existen líneas de investigación que hacen presumir razonablemente que existe un alto grado de probabilidad de que en los domicilios a catear se realizan actos relacionados con la delincuencia organizada, para cometer delitos contra el ambiente y contra la salud (minuto 46:18, video 1 parte 2).

<sup>15</sup> Mediante el cual se hizo de su conocimiento que derivado de la ejecución de la orden de cateo se encontró en flagrante delito al imputado de nombre \*\*\*\*, y dado que la fiscalía previamente conocía los antecedentes de la investigación que motivaron la autorización de la orden de cateo, en dicha técnica de investigación se solicitó fuera remitida la información relativa y relacionada para que obrara dentro de la carpeta de investigación (minuto 48:36, video 1 parte 2).





• Oficio FGR/AISTE/SENAT/\*\*\*\*\* , de fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, signado por el supervisor especial Ricardo Rosales Flores.<sup>19</sup>

• Oficio con terminación \*\*\*\*\* de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, signado por el suboficial de la Policía Federal Ministerial, José Guadalupe Ballesteros Yescas, mediante el cual informó en relación a la inspección de la libreta marcada con el indicio número tres.<sup>20</sup>

Una vez que fue justificada la solicitud de vinculación a proceso, el aquí quejoso hizo uso de su derecho fundamental de solicitar que se resolviera su situación jurídica en el término

representante de la organización sin fines de lucro Sea Shepherd Conservation Society; el oficio \*\*\*\*\* , de la declaración ministerial del testigo \*\*\*\*\* , parte policial \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , destacándose que el órgano jurisdiccional consideró suficiente los indicios para considerar que las líneas a intervenir, en este caso números telefónicos, eran utilizados por integrantes de la organización criminal dedicada a la pesca de tráfico y comercialización de la Totoaba macdonaldi, conocida comúnmente como Totoaba. Dicha técnica de investigación fue autorizada para concluir el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Posteriormente también se cuenta como dato de prueba con la copia de la autorización de prórroga de la intervención de comunicaciones privadas con número de expediente \*\*\*\*\* , en la cual para justificar la procedencia de la prórroga se expusieron como datos de prueba diversas transcripciones de las escuchas y resultado que se obtuvo de la intervención de comunicaciones privadas, señalando que los interlocutores en diversos eventos hicieron referencia a material bélico que pudiera ser utilizado para llevar a cabo sus actividades delictivas, filetes de Totoaba, Totoaba ahumada, mostrando los interlocutores asombro en la reducción en el número de vaquitas marinas que hay actualmente, técnica de investigación que fue prorrogada sesenta días para concluir el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (minuto 56:29, video 1 parte 2).

<sup>19</sup> Mediante el cual entre otras cosas, refiere que de acuerdo con las fuentes consultadas en julio de 2018, la Organización \*\*\*\*\* por sus iniciales \*\*\*\*\* , dio a conocer los resultados de una investigación encubierta realizada durante catorce meses, denominada operación \*\*\*\*\* en la que muestra la composición, ubicación y modus operandi de los cárteles de la Totoaba conformados por mafia China y crimen organizado mexicano, el reporte final estableció que los \*\*\*\*\* están compuestos por peligrosos delincuentes mexicanos y narcotraficantes en Baja California, las comunidades pesqueras de San Felipe y Santa Clara, comerciantes y empresarios chinos, principalmente con base en Tijuana y en Mexicali, de acuerdo con la operación \*\*\*\*\* , está involucrada una persona apodada como el \*\*\*\*\* que está involucrado con una organización de la droga de Tijuana y le pagaba regularmente para poder transportar las vejigas natatorias, conocidas como buchec de Totoaba, a través de las rutas que los controlan. También refiere que es relevante, que la \*\*\*\*\* con \*\*\*\*\* sugiere que desde la detención del primero, el segundo tomó las riendas como principal lugarteniente de la pesca de Totoaba en San Felipe, sin embargo varios podrían ocupar el lugar \*\*\*\*\* actualmente preso en el Centro de Reinserción Social de Mexicali (minuto 01:13:57, video 1 parte 2).

<sup>20</sup> Que son dos libretas, pero en específico hace una inspección de la libreta, aclara que ese indicio tres, como lo refirió al principio de su deposición, fueron encontrados en el domicilio del ahora imputado, y para poder enfatizar se refiere a una libreta que tiene carátula con rayas de colores y las leyendas impresas \*\*\*\*\* y contiene 100 hojas, misma que al abrirlas se observa en su reverso lo que al parecer son tres números telefónicos escritos, siendo los siguientes: \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* y el \*\*\*\*\* , en su contraportada es de color blanco, en dicha libreta se contabilizan 43 hojas cuadrículadas con leyendas impresas de nombres y apodos de personas, citando cantidades diversas de dinero y de diferentes productos siendo algunos ejemplos los siguientes, \*\*\*\*\* dice una Leyenda, 100 \*\*\*\*\*



de ciento cuarenta y cuatro horas<sup>21</sup>; el juez de Control determinó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado aquí quejoso, para posteriormente dar por concluida dicha audiencia y señaló fecha para la continuación de la audiencia. Lo cual encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 1a./J. 120/2017 (10a.), con rubro y texto:

**“VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO).** De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales - de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese

deja 100 dólares, resto cuando venga, el siguiente dice \*\*\*\*\* 140 totis en fresca pack, marcar cuando esté listo para llevar pagado, también hay otro apodo que \*\*\*\*\* que dice 50 buche para el sábado en la noche, \*\*\*\*\* no abona pagar en la entrega, llevarles 200 m fresnos primera sección \*\*\*\*\* dice 90 y tot, abona 10 doll, después \*\*\*\*\* dice recibió 120 totis. 5 de febrero restan 1200 verdes, \*\*\*\*\* dice que se lleva 170 botis abona 5.0 ver. 23 de abril de 2021, también habla de otro apodo o nombre que es \*\*\*\*\* pago 90 tot, diez mil verdes abril 2021, \*\*\*\*\* dice vino por 220, dice viene mañana a pagar deja 5000 \*\*\*\*\* dice 20 tot fres pagado; otro nombre que es \*\*\*\*\* debe el último encargo paga cuando regresa se lleva 140 debía 80, asimismo refiere otras cantidades y nombre como \*\*\*\*\* Y \*\*\*\*\* habla de buches de Totoaba, habla de dólares de cantidades de 4000 dólares de 1200 dólares (minuto 01:16:40, video 1 parte 2).

<sup>21</sup> Minuto 01:29:45, video 1 parte 2.

*lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar”.<sup>22</sup>*

**III. Valoración de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público:** como de forma correcta lo sostuvo la autoridad responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso el siete de agosto de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en la capital de la entidad, respetó el ejercicio de ponderación<sup>23</sup> que contrae el artículo 20, inciso A, fracción II, en relación con la fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto los datos de prueba que derivaron de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público. Dicho numeral dispone:

<sup>22</sup> Tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2015704, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página: 392, materia: penal.

<sup>23</sup> Registro digital: 2022178. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 28/2020 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 260. Tipo: Jurisprudencia. Rubro: “VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN”.





$$[\dots]$$

En su conjunto, la descripción típica del hecho imputado, consiste en que se realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

De igual forma, el diverso hecho ilícito por el cual el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso que la ley señala como delito de **delincuencia organizada**, en su modalidad de **cometer delitos contra el medio ambiente**, previsto en la fracción X del artículo 2, sancionado en el inciso b), de la fracción II, del numeral 4, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los cuales establecen:

[...]

**X. Contra el Ambiente previsto en la fracción IV del artículo 420 del Código Penal Federal.**



*Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley”.*

**“Artículo 4o.-** Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:

[...]

**II.** En los demás delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley:

**b)** A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa. [...]

En su conjunto, la descripción típica del hecho imputado, consiste en que cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer el delito contra el ambiente previsto en la fracción IV, del artículo 420, del Código Penal Federal.

Conforme a lo anterior, quien aquí resuelve estima que **como lo determinó de forma correcta la autoridad responsable en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto**, el juez de Control atendió los extremos que la legislación le impone y la propia Constitución Federal, al momento de tener por demostrados indiciariamente los hechos ilícitos a estudio.

Pues, atento a los principios del sistema acusatorio y al estándar probatorio de cada etapa, se advierte que, de manera probable **a las diez horas con cinco minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno**, el aquí quejoso **fue detenido en flagrancia delictiva al ejecutarse una orden de cateo** que autorizó el **veintiocho de julio del dos mil veintiuno**, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal



Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en la técnica de investigación \*\*\*\*\* , en el domicilio ubicado en

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* , con coordenadas de latitud

\*\*\*\*\* y longitud \*\*\*\*\* , ello en virtud de que lo

encontraron en posesión de **7.6535 kilogramos** (indicio C1), y **de tres piezas** (indicio C2), **de pepino de mar**, los cuales fueron localizados hasta el fondo de un congelador ubicado en un espacio denominado como bodega y en un refrigerador ubicado en la cocina del citado inmueble, respectivamente; especie acuática que después de ser analizada por el personal de la Coordinación General de Servicios Periciales, determinaron que se trata de \*\*\*\*\* ,

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\* , cuyo

aprovechamiento se encuentra regulado por la Norma Oficial Mexicana \*\*\*\*\* ; conducta que se realizó sin contar con el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con la que se puso en riesgo la viabilidad biológica de esa especie marina, la cual está bajo la categoría de amenaza y sujeta a protección especial.

De igual manera, se advierte de manera probable, la existencia de una organización criminal denominada \*\*\*\*\* \*\*

\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\*\*\*\* (integrada por \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* dedicada a cometer delitos contra el medio ambiente, principalmente, a la pesca, tráfico y comercio de totoaba Macdonaldi, conocida comúnmente como totoaba, especie endémica en veda total clasificada en la categoría de peligro de extinción y sujeta a protección especial, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana \*\*\*\*\* ; que probablemente el aquí quejoso pertenece a esa organización criminal **al menos desde el año dos mil dieciocho**, llevando a cabo actos de pesca furtiva y comercio de buche de totoaba



## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

desde su domicilio ubicado en \*\*\*\*\* \*\*

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

con coordenadas de latitud \*\*\*\*\* y longitud \*\*\*\*\*

Se afirma lo anterior, en virtud de que como lo determinó la Magistrada responsable en la resolución que constituye el acto reclamado materia del presente juicio, esos hechos concatenados con los antecedentes de investigación que se precisaron párrafos supra, y atendiendo a las reglas de la libre valoración que dispone el artículo 20, inciso A, fracción II, en relación con la fracción X, de la Constitución Federal, así como por lo dispuesto por los artículos 259<sup>25</sup> y 265<sup>26</sup> del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer de manera indiciaria día, hora y lugar del hecho delictivo.

Además, los actos realizados y plasmados por los  
elementos de la Policía Federal Ministerial \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\* en el informe

**policial homologado** con terminación **11892/2021** de treinta de julio de dos mil veintiuno y demás datos de pruebas que se destacaron, arrojan de manera lógica y, a nivel de indicio, que los hechos hacen eco en el delito de **contra la biodiversidad** y en el diverso de **delincuencia organizada**. De ahí que en su conjunto y como correctamente lo determinó la autoridad responsable, el Juez de Control legalmente tuvo por demostrado indiciariamente el hecho que la ley señala como delito **contra la biodiversidad**, en la modalidad de **poseer ejemplares de una especie acuática sujeta a protección especial**, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV,

**25 Artículo 259. Generalidades** Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable.

Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código.

<sup>26</sup> **Artículo 265. Valoración de los datos y prueba** El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.

Respecto a la probable participación del imputado aquí quejoso en los hechos ilícitos acreditados de manera indiciaria, este Tribunal concluye que fue correcta la determinación de la responsable al establecer en la resolución que aquí se analiza, que como lo estimó el juez de Control, hasta ese momento procesal, dicha participación quedó demostrada de manera probable, ya que los datos de prueba que se precisaron, valorados de manera libre y lógica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, válidamente permitieron al Juez de Control considerar que son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer que el imputado, en grado de probabilidad, cometió los hechos delictivos.

De lo anterior se advierte, que la probable participación del quejoso en los hechos ilícitos, se dio como autor directo y de manera dolosa, cometidos en términos de los artículos 13, fracción II, 7, 8 y 9, párrafo primero, todos del Código Penal Federal; por ende, a juicio de quien resuelve, la Magistrada responsable debidamente consideró correcto el encuadramiento practicado por el juez de Control de los hechos que se desprenden de los datos de prueba que proporcionó el fiscal, los cuales no fueron refutados por la defensa como se verá en el apartado siguiente.

En consecuencia, a la luz de los principios del sistema penal acusatorio, **se concluye que como de forma correcta lo estableció la Magistrada responsable en la resolución que**





**constituye el acto reclamado**, el Juez de Control se ajustó al contenido de los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dictar auto de vinculación en contra de \*\*\*\*\*, por el hecho que la ley señala como delito **contra la biodiversidad**, en la modalidad de **poseer ejemplares de una especie acuática sujeta a protección especial**, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal y el diverso ilícito de **delincuencia organizada**, en su modalidad de **cometer delitos contra el medio ambiente**, previsto en la fracción X del artículo 2, sancionado en el inciso b), de la fracción II, del numeral 4, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

#### **IV. Causa de extinción de la acción penal o excluyente**

**del delito.** En la revisión de la videograbación de la audiencia inicial, contenida en el archivo informático almacenado en el disco versátil digital (DVD) que proporcionó el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se colige no hay causa fundada de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Circunstancia que tampoco fue apreciada por la Magistrada responsable, por tal motivo es inconcuso determinar que, al menos hasta el momento que se analiza, no se encuentra acreditada alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

**3. Estudio de los conceptos de violación.** Son **infundados** los conceptos de violación formulados, sin que se advierta motivos para suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

Aduce esencialmente la parte quejosa lo siguiente:

VERONICA LIZBETH AGUAYO GOMEZ TELLO  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.33.36.36.31.36.34.33.  
26/03/24 14:26:36

ir sin ra  
re y lóg  
rtinentes  
dos los h  
n, decir c  
que la va

**b) Que la resolución reclamada es inconstitucional ya que la Magistrada responsable omitió analizar todos los argumentos expresados en el escrito de agravios y que fueron formulados contra el auto de vinculación a proceso en la causa penal**



\*\*\*\*\* , específicamente el agravio relativo a que no se demostró la pertenencia del imputado a una organización delincuencial concreta y con ello, se violentan en su perjuicio los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso.

Sostiene el quejoso, que en la resolución reclamada la responsable afirmó que con los datos de prueba quedó demostrada la pertenencia, sin embargo, de la lectura de la resolución combatida no se advierten las razones particulares y causas especiales que llevaron a la responsable a concluir que dicha afirmación es correcta, ya que la Magistrada responsable realizó lo que desde su punto de vista era el análisis del debate en audiencia y de las razones del juez de Control para vincular, pero en ninguna parte de su estudio abordó el tema relativo a la pertenencia que era el punto toral de la argumentación en el agravio número dos del escrito de apelación; por lo que la responsable debía hacer un pronunciamiento concreto y no limitarse simplemente a señalar que el Juez sí precisó las causas y razones particulares que demostraban la pertenencia.

c) Que la resolución reclamada resulta violatoria de los derechos humanos de fundamentación y motivación, en virtud de la incorrecta valoración que le otorgó la responsable a los datos de prueba que fueron expuestos en la audiencia inicial que se celebró en la causa penal \*\*\*\*\*.

Indica que la Magistrada responsable, como en su momento el juez de Control, reconoció que durante la continuación de la audiencia inicial, la defensa demostró con pruebas contundentes que el domicilio respecto al que se solicitó la orden de cateo no existe, pero que al coincidir uno solo de los elementos de identificación, la ejecución de la misma resultaba congruente con el orden constitucional, sin



del dom  
ión ciert

responsa  
identifica  
lenta co  
ejear de  
a, adema  
que bas  
xistencia

magistrado  
a existió  
os perito  
on la de  
e se enc  
dio idóne  
en el esc  
identifica

os de  
artículo  
la Mag  
el materi  
la causa



Sostiene, que la figura típica prevista en el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sanciona la "pertenencia" del sujeto a una organización delictiva cuya finalidad o resultado es realizar determinados delitos, por lo que el actuar reprochable del sujeto se da como un acto instantáneo de formar parte de dicha organización, como el elemento característico del tipo penal que implica pertenencia y, por ende, personalísimo de integrar dicho grupo dadas las condiciones respectivas, y ese actuar se realiza de manera individual, sin necesidad de división de actos conformadores de la efectiva comprensión de la conducta punible.

Indica, que esta organización antisocial en cuanto a la responsabilidad de cada uno de sus integrantes se verifica de manera individual, en función de su aportación concreta, esto es, de su carácter de pertenencia a la institución organizada delictiva, sin que sea dable confundir la pluralidad de sujetos necesarios para la conformación del tipo con la forma de participación de cada uno de sus integrantes, que sería tanto como afirmar que la calidad cuantitativa del tipo penal determina la forma de intervención de los sujetos activos, lo cual sostiene el recurrente, es claramente incorrecto, ya que la forma de participación no se erige como elemento típico.

Señala que de la resolución que se reclama se aprecia que tanto la Magistrada responsable como el juez de Control **realizaron una indebida valoración de los datos de prueba que expuso el agente del Ministerio Público de la Federación en la audiencia inicial**, pues si bien hizo relación





de varios datos de prueba, lo cierto es que con ninguno de ellos se logra establecer al menos de manera indiciaria, que el quejoso pertenece y forma parte de una organización de hecho que tiene la intención de llevar a cabo un tipo particular de hechos constitutivos de delito, mucho menos de la organización delictiva que menciona el Fiscal Federal.

f) La resolución que ahora se reclama, resulta violatoria de derechos humanos de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la misma resulta incongruente en relación con los planteamientos que se hicieron en el escrito de apelación y los datos de prueba que fueron expuestos en la audiencia inicial, ello en virtud de que en la página ciento trece cuando la responsable se refiere a los testigos colaboradores confunde el argumento que se planteó en los agravios respecto a dichos testigos, pues su contestación al agravio se centra en la circunstancia de si personas con identidad reservada pueden o no declarar, y en su caso si éstas deben ser identificadas.

Sin embargo, en los agravios de apelación en ningún momento se planteó que la ilegalidad de la resolución recurrida provenía del hecho de no estar identificados los testigos, sino que quienes no estaban identificados eran las personas que recabaron dichas entrevistas, lo cual era un requisito que impone el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que al incumplirlo, dichos testimonios no debían tomarse en cuenta, pues no se tenía certeza de que dichos testimonios efectivamente se rindieron (aunque fuera con identidad reservada), ya que si no se identifica al servidor público que los realizó, el lugar, y la fecha, no se tiene certeza de su existencia.

puede decirse que es como el logotipo de la marca. Técnicamente, esos datos, tales como las direcciones de dichas empresas, no bastan para estimar

destaca  
os conc  
y e), una  
sable e in  
ó haber  
oa, **argu**  
alzada a  
debe an  
sitos Con

destaca  
os con  
y e), una  
sable e in  
ó haber  
oa, **argu**  
alzada a  
debe an  
sitos Con  
ndicó a  
previa  
le Contro  
la Magi  
nstitucio

s neces  
realiza  
cia de vi



atendiendo a los principios que rigen en el sistema penal acusatorio y conforme al estándar probatorio de esa etapa.

Por tanto, el análisis del presente asunto se realizará a partir del contenido **de las constancias que remitió la Magistrada responsable y el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali**; lo anterior, sin sustituir la función de la autoridad responsable, solo analizar la legalidad de la ponderación, es aplicable:

**“VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN.** Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de



*prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia.<sup>27</sup>*

Enseguida, se procede a analizar el resto de los motivos de inconformidad que expresó el quejoso y se determina que el concepto de violación marcado con el inciso **a)**<sup>28</sup>, **resulta infundado**, ya que contrario a lo que sostiene el solicitante de la tutela constitucional, la Magistrada responsable no fue omisa en dar contestación a los agravios que expresó en su respectivo recurso de apelación.

A fin de sustentar dicha afirmación, es necesario destacar que en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra previsto el principio de exhaustividad y congruencia, que debe cumplir toda resolución emitida dentro de un juicio, el cual textualmente dice lo siguiente:

<sup>27</sup> Registro digital: 2022178. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 28/2020 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 260. Tipo: Jurisprudencia

<sup>28</sup> Que la resolución reclamada es inconstitucional al violentar en su perjuicio los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso, ya que la autoridad responsable omitió analizar todos los argumentos planteados en el escrito de agravios y que fueron formulados contra el auto de vinculación a proceso en la causa penal \*\*\*\*\*; sostiene el recurrente que la responsable, al inicio del considerando quinto, señaló que haría un análisis integral de los agravios, precisó cuál era su conclusión en relación con el asunto y señaló que desde su punto de vista, el Juez de origen si actuó con apego a las normas constitucionales y legales al dictar el auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso, sin embargo, para llegar a dicha conclusión no se apoyó en el análisis de los datos de prueba que fueron expuestos en la audiencia inicial, sino que se derivó de la transcripción de los datos de prueba que fueron expuestos oralmente por la Fiscalía, sin que existiera una verdadera valoración por parte de la responsable, y muchos menos un análisis completo de los argumentos planteados en el escrito de agravios, que omitió contestar agravio formulado respecto a que los domicilios no eran el mismo.

Indica que no basta, concluir sin razonar, que al haber hecho el Juez una valoración libre y lógica de los datos de prueba, estos eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para tener por establecidos los hechos, **toda vez que era necesaria su propia valoración**, decir como la realizó, para de esa manera poder determinar que la valoración que hizo el Juez era la correcta.



Siendo conveniente establecer que entre los principios procesales<sup>30</sup> para el caso que nos ocupa destaca el de “congruencia”, en el cual se encuentra comprendida por una parte, la congruencia interna, que es la entendida como aquella característica de que la resolución no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí, y por otra, la congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio.

Expuesta la importancia de la congruencia en las resoluciones judiciales, los dos tipos que existen y el precepto en que se encuentra positivizada en la Constitución, es conveniente traer a contexto en qué casos se presenta la incongruencia, los cuales son, a saber:

I. El juzgador omite decidir alguna de las cuestiones oportunamente planteadas por las partes y que sean conducentes a la solución del litigio;

II. El juzgador otorga cosa distinta a la solicitada por la parte o condena a persona no demandada o a favor de persona que no demandó, yendo más allá del planteo litigioso;

<sup>30</sup> Criterios o ideas fundamentales, contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad procesal, véase a Ovalle Favela, José, *Teoría general del proceso*, 2ª ed., México, Harla, 1994, p. 187.



III. El juzgador otorga más de lo que fue pretendido por el actor; y

IV. Si hay incoherencia entre la motivación y la decisión, siendo contradictorias entre sí, se presenta el caso de la incongruencia interna.

Ahora, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos en los agravios hechos valer oportunamente, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada uno de los puntos que hubieran sido materia del debate.

Entonces, cuando la autoridad responsable emite su resolución respecto a una pretensión sin resolver sobre algún punto, resulta contrario al principio exhaustividad.

Apoya a lo anterior, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, del mes de marzo de 2005, página 959, que se transcribe enseguida:

**“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS.** Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbido en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se

*hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traducéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal.”*

En suma, los principios de exhaustividad y de congruencia en términos generales implican que se atienda o agote todo lo pedido y que exista relación y coherencia entre lo solicitado y lo resuelto.

En tal tenor, la resolución reclamada contrario a lo que sostiene el quejoso, no es violatoria de la garantía de





exhaustividad contenida en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se sostiene lo anterior, en virtud de que al efectuar un análisis de la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, haya dejado de pronunciarse respecto de alguno de los agravios que formuló el recurrente, aquí quejoso.

Lo anterior es así, ya que como se advierte de la lectura de la determinación reclamada, la Magistrada responsable llevó a cabo una exposición detallada de cada uno de los tres agravios que formuló el recurrente y enseguida, dio contestación a los mismos con base en el análisis del registro de audio y video de la audiencia de vinculación a proceso.

Sin que asista la razón jurídica al quejoso al sostener en el concepto de violación sintetizado en el **inciso a)**, que la Magistrada responsable fue omisa en dar contestación al argumento en el que sostuvo que las coordenadas que se indicaron en la orden de cateo corresponden a otro domicilio, ya que éste es inexistente; además de que las coordenadas geográficas son un complemento de identificación del domicilio y que en ocasiones, como en los predios rústicos, donde no existe nomenclatura, dichas coordenadas son el único elemento definitorio de identificación, lo que no sucede en el caso concreto, donde el elemento definitorio es la nomenclatura; además de que, en el **concepto de violación resumido en los incisos c)<sup>31</sup> y d)<sup>32</sup>** también hace valer argumentos respecto a la

<sup>31</sup> Indica que la responsable, como en su momento el Juez de Control, reconoció que durante la continuación de la audiencia inicial, la defensa demostró con pruebas contundentes que el domicilio respecto al que se solicitó la orden de cateo no existe, pero que al coincidir uno solo de los elementos de identificación, la ejecución de la misma resultaba congruente con el orden constitucional, sin embargo, paso por alto que no es válido la afectación de un derecho cuando existen dudas al respecto, por lo que para la afectación de la inviolabilidad del domicilio se requieren proporcionar datos de identificación ciertos y concretos, los cuales deben ser válidos.



Es así, ya que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Magistrada responsable al dar contestación al primer agravio que formuló el apelante, aquí quejoso estableció en lo que aquí interesa, que una vez que analizó la transcripción de parte de la audiencia de formulación de imputación advirtió que para determinar que la orden de cateo se ejecutó en el domicilio autorizado para tal efecto, el Juez de Control analizó los datos de prueba incorporados por la defensa, con los cuales trató de establecer que el número registral corresponde a \*\*\*

Por lo que, si la responsable consideró como único elemento coincidente para la identificación de un domicilio las coordenadas geográficas, violenta con ello la seguridad jurídica de los gobernados, al dejar de lado cualquier otro elemento que proporcione certeza, además de que no existe fundamento legal que establezca que bastan las coordenadas geográficas para identificar la existencia y ubicación de un inmueble.

Además, sostiene que la responsable pasó por alto que en la propia audiencia existió debate en el sentido de que ni el Ministerio Público y los peritos que asistieron a la diligencia de cateo, coincidían con la determinación de las coordenadas geográficas en las que se encontraban, por lo que resulta evidente que no es el medio idóneo para identificar un inmueble y que como se sostuvo en el escrito de agravios, son únicamente un complemento de la identificación por medio de la nomenclatura oficial.

32 Que para dictar el auto de vinculación a proceso respecto a los delitos que fueron materia de imputación, el Juez de origen tomó en cuenta y valoro indebidamente el acta circunstanciada de diligencia de cateo de treinta de julio de dos mil veintiuno, la cual se ejecutó en un domicilio diverso al que se autorizó dicha técnica de investigación –cateo \*\*\*\*\*–, lo cual reiteró la responsable.

Señala además el recurrente, que durante el desahogo de las audiencias de formulación de imputación y de vinculación a proceso, el Agente del Ministerio Público de la Federación fue reiterativo y enfático en señalar que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio autorizó una orden de cateo en el domicilio que se ubica en \*\*\*\*\*

Especializado en el Sistema para la Asesoración autorizo a orden de cateo en el domicilio que se ubica en  
 \*\*\*\*\* con coordenadas geográficas **latitud** \*\*\*\*\* , **longitud** -  
 \*\*\*\*\* , y en el local comercial denominado "**\*\*\*\*\***"; sin embargo, en la audiencia de continuación de  
 vinculación se acreditó de manera fehaciente que el domicilio en donde se ejecutó la orden de cateo se ubica en \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* el cual no se trata del

mismo domicilio; situación que incluso reconoció el propio Juez al señalar que "Si bien existe discrepancia respecto este número, el número que se proporcionó por esta fiscalía que lo es el 278-201"; y no obstante ello, concedió valor probatorio a los medios de prueba localizados al interior del domicilio, obtenidos con violación de derechos fundamentales.



Además, sostuvo que para justificar lo anterior, el juez de Control tomó en consideración la copia de la técnica de investigación de la cual derivó la orden de cateo, reseñada como dato de prueba por el fiscal, a la que tuvo acceso cuando fue autorizada por dicho juzgador, en cuya solicitud se hizo referencia, entre otros, a una inspección que llevaron a cabo elementos de la Policía Federal Ministerial, derivado de la noticia que obtuvo la fiscalía con motivo del escrito que suscribieran personas que fueron vinculadas a proceso relacionadas con los mismos hechos que se investigan, a los cuales se les consideró como testigos colaboradores, a quienes se les asignó el nombre de \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , y que esos testigos colaboradores, según referencia del fiscal, hicieron el señalamiento en contra de una persona a quien conocen como \*\*\*\*\*, y que éste se dedica a comprar buches de Totoaba, los que distribuye con sus socios que son chinos y que paga a los pescadores en el domicilio ubicado precisamente en calle \*\*\* \*\*\*\*\* número \*\*\*\*\* donde tiene un local comercial de nombre \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*.

Asimismo, la Magistrada responsable indicó que el Juez de Control apreció que con motivo de ese hecho conocido a través de ese escrito, la fiscalía ordenó diversos actos de investigación, dentro de ellos, a los que hizo alusión, como lo era la inspección de ese domicilio, y otro que no se precisaba, habida cuenta que el que les ocupaba, era donde se llevó a cabo la detención del señor \*\*\*\*\* que era precisamente el que se estaba analizando, y que de este acto de investigación, el elemento de la Policía Federal Ministerial destacó haber ubicado el domicilio y que había proporcionado las características de dicho domicilio y las coordenadas geográficas.

Precisó la Magistrada responsable, que además de ello, el Juez de Control también tomó en consideración que de los datos de prueba que verbalizó el fiscal federal se contaba con la propia acta de cateo ejecutada en el domicilio que fue objeto de la inspección, donde el personal fue atendido por el imputado, quien permitió el acceso, donde fueron localizadas especies que a la postre fueron consideradas que requieren protección especial, cuya diligencia de cateo que el resolutor apreció que se llevó a cabo en compañía, entre otros, de diversos peritos, como son el perito en materia de fotografía, de criminalística de campo, pericial respecto de delitos ambientales, quienes hicieron referencia a que se constituyeron en el domicilio antes indicado, ubicado en \*\*\* \*\*\*\*\* número \*\*\*\*\* , en \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\* en las coordenadas geográficas \*\*\*\*\*

VERONICA LIZBETH AGUAYO GOMEZ TELLO  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.33.36.36.31.36.34.3.  
26/03/24 14:26:36





los delitos, donde confluye esta información de haberse  
constituido en el domicilio ubicado en calle \*\*\* \*\*\*\*\* número  
\*\*\*\*\*, en las coordenadas geográficas antes precisadas.

De igual forma, la Magistrada responsable determinó que de forma correcta el Juez de Control estimó que esa información derivada de los datos de prueba, resultaban lógicos, congruentes y pertinentes, para asignarles valor probatorio, al no haber sido desvirtuados de manera concluyente con la información destacada por la defensa, puesto que la fiscalía invocó otros datos de pruebas e insistió en lo atinente a la técnica de investigación de la cual derivó el cateo que se ejecutó en esa técnica de investigación, e hizo referencia al escrito en que vierten información testigos colaboradores quienes hacen el señalamiento respecto al domicilio ubicado en calle \*\*\* \*\*\*\*\* número \*\*\*\*\* , esquina con \*\*\*\*\* , y posteriormente la policía federal ministerial se constituye al mismo para dar fe de su existencia quienes, en términos de los aludidos numerales, en específico 132 y 217, indicaron en su informe haberse constituido en el domicilio en mención y refirieron que ese mismo domicilio se ubica en las coordenadas geográficas antes destacadas.

Por ello, la Magistrada responsable estimó que el Juez de Control determinó correctamente que si bien la defensa incorporó diversos datos de prueba en los cuales se establece que el número registral corresponde a \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* esquina con \*\*\*\*\* número \*\*\*, más que desvirtuar de manera concluyente lo señalado por la fiscalía en su solicitud, le permitían corroborar los datos que proporcionó la fiscalía tendentes a evidenciar que el domicilio respecto al cual solicitó la técnica investigación y en el que a la postre se ejecutara la misma, fue precisamente en el domicilio ubicado en la calle \*\*\* \*\*\*\*\* esquina con \*\*\*\*\* , y que si bien existía

en la  
eográfica

a de los  
practicó l  
y no a  
ierto es  
efensa p  
el Policía

nsable o  
utilizó  
a fiscal  
adas por  
gitud.

cas se de  
cia que  
pecífica;  
e la ubic  
uelven a



Indicó la Magistrada responsable que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (edición del tricentenario) la palabra coordenada se utiliza para determinar la posición de un punto en el plano o en el espacio.

Agregó, que con el objetivo de obtener el concepto de “coordenadas geográficas”, consultó en internet el portal <https://www.definicionabc.com/geografia/coordenadas-geograficas.php>.

Estableció la responsable que el concepto de coordenadas geográficas es una versión más específica que permite ubicar o localizar, con gran precisión, diversos espacios sobre la superficie del planeta tierra.

Por tanto, concluyó que al no existir, hasta ese momento, un dato de prueba contundente que desvirtúe que el domicilio donde se ejecutó la diligencia de cateo e inspección por parte del policía federal ministerial, sea un domicilio distinto al en que se autorizó la técnica investigación, es que son infundados los agravios de la defensa.

De lo anterior se advierte, que contrario a lo que aduce el quejoso, la Magistrada responsable sí dio contestación a los agravios que formuló vía apelación mismos que se precisaron párrafos supra, además de que externó las consideraciones por las cuales las coordenadas geográficas, junto con los datos de prueba que destacó, eran eficaces hasta esa etapa para acreditar, que la diligencia de cateo se llevó en el domicilio respecto del cual fue otorgada la autorización por parte del Juez de Control, para llevar a cabo dicha técnica de investigación, además de que señaló porque no eran suficientes los datos de prueba que ofertó la defensa del impetrante para acreditar la inexistencia del domicilio en el que se autorizó el cateo.



De ahí que como se adelantó, son **infundados** los conceptos de violación sintetizados en los **incisos a), c) y d)**.

<sup>33</sup> Que la resolución reclamada es inconstitucional ya que la autoridad responsable omitió analizar todos los argumentos planteados en el escrito de agravios y que fueron formulados contra el auto de vinculación a proceso en la causa penal 307/2021, específicamente el agravio planteado en el sentido de que no se demostró la pertinencia del imputado a una organización delictuosa concreta y con ello, se violenta en su perjuicio los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso.

<sup>34</sup> Que la resolución que ahora se combate resulta violatoria de derechos humanos de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales, toda vez que se realizó una indebida valoración del material probatorio que se expuso en la audiencia inicial en la causa penal \*\*\*\*\* del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al considerar que existen datos de prueba suficientes para tener por establecido el hecho que la ley señala como **delincuencia organizada**, previsto y sancionado en el artículo 2º, fracción X, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Indica, que esta organización antisocial en cuanto a la responsabilidad de cada uno de sus integrantes se verifica de manera individual, en función de su aportación concreta, esto es, de su carácter de pertenencia a la institución organizada delictiva, sin que sea dable confundir la pluralidad de sujetos necesarios para la conformación del tipo con la forma de participación de cada uno de sus integrantes, que sería tanto como afirmar que la calidad cuantitativa del tipo



la ley señala como el delito de delincuencia organizada, en específico, el elemento de pertenencia.

Lo anterior, es así ya que contrario a lo que argumenta el quejoso, la Magistrada responsable sí estableció el por qué con los datos de prueba que expuso el Fiscal de la Federación se demostró la pertenencia del imputado a la organización criminal, ya que como se advierte de la resolución que constituye el acto reclamado, la responsable estableció que contrario a lo aducido por el recurrente, de los registros de audio y video de la audiencia en que se emitió la resolución impugnada, se revela que el Juez de Control **razonó adecuadamente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público para estimar de manera razonable que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de delincuencia organizada;** datos de prueba que se precisan nuevamente:

- **Copia de la técnica de investigación** número \*\*\*\*\* de fecha veintiocho de julio dos mil veintiuno, en donde se autorizó la orden de cateo en el domicilio ubicado en \*\*\*\*\* en \*\*\*\*\* en \*\*\*\*\* , con coordenadas geo referenciales latitud \*\*\*\*\* longitud - \*\*\*\*\*

- **Acta circunstanciada de cateo** del inmueble ubicado en \*\*\*\*\* número \*\*\*\*\* ya referido, relativo a la orden de cateo autorizada mediante la técnica de investigación \*\*\*\*\* , en que se destacó principalmente la existencia de

penal determina la forma de intervención de los sujetos activos, lo cual sostiene el recurrente, es claramente incorrecto, ya que la forma de participación no se erige como elemento típico.

Señala que de la resolución que se reclama aprecia que tanto la responsable como el Juez de Control **realizaron una indebida valoración de los datos de prueba que expuso el Agente del Ministerio Público de la Federación en la audiencia inicial**, pues si bien hizo relación de varios datos de prueba, lo cierto es que con ninguno de ellos se logra establecer al menos de manera indiciaria, que el quejoso pertenece y forma parte de una organización de hecho que tiene la intención de llevar a cabo un tipo particular de hechos constitutivos de delito, mucho menos de la organización delictiva que menciona el Fiscal Federal.

<sup>35</sup> De la cual se desprende, según lo manifestado por la fiscalía, que existen líneas de investigación que hacen presumir razonablemente que existe un alto grado de probabilidad de que en los domicilios a catear se realizan actos relacionados con la delincuencia organizada, para cometer delitos contra el ambiente y contra la salud (minuto 46:18, video 1 parte 2).

● Oficio \*\*\*\*\* de fecha treinta y  
le julio de dos mil veintiuno, dirigido al agente del  
erio Público de la Federación adscrito a la Unidad  
ializada en Investigación de Tráfico de Menores,  
nas y Órganos de la Fiscalía Especializada en Materia de  
uencia Organizada, quien se encuentra a cargo de la  
a de investigación \*\*\*\*\* , que  
o la autorización de la técnica de investigación \*\*\*\*\* .<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Mediante el cual se hizo de su conocimiento que derivado de la ejecución de la orden de cateo se encontró en flagrante delito al imputado de nombre \*\*\*\*, y dado que la fiscalía previamente conocía los antecedentes de la investigación que motivaron la autorización de la orden de cateo, en dicha técnica de investigación se solicitó fuera remitida la información relativa y relacionada para que obrara dentro de la carpeta de investigación (minuto 48:36, video 1 parte 2).

VERONICA LIZBETH AGUAYO GOMEZ TELLO  
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.35.30.33.36.36.31.36.34.33.  
26/03/24 14:26:36





## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

• **Copia de la técnica de investigación de intervención de comunicaciones privadas** número **\*\*\*\*\***, del veinte de abril de dos mil veintiuno, autorizada por el Juez Cuarto de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en Ciudad de México.<sup>38</sup>

- **Técnica de investigación** que de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, se estableció que desde dos mil dieciocho existe una organización con fines delictivos dedicada principalmente a la pesca, al tráfico y al comercio de la especie denominada *Totoaba macdonaldi*, conocida comúnmente como Totoaba, especie endémica en veda total con protección especial por estar en peligro de extinción y sujeta a un tratado Internacional del que México es parte.<sup>39</sup>

- Oficio FGR/AISTE/SENAT/\*\*\*\*\*<sup>40</sup>, de fecha uno de agosto de dos mil veintiuno, signado por el supervisor especial Ricardo Rosales Flores.

<sup>38</sup> En la cual autorizó la intervención de comunicaciones privadas solicitada por el agente Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la FENDO, en la carpeta de investigación \*\*\*\*\* (minuto 55:20, video 1 parte 2).

39 Que aún con el esfuerzo de diversas autoridades y organizaciones civiles que pretenden que esas conductas no se realicen y son atacados violentamente; de tal manera, que dichas autoridades al verse superados en cantidad y tornarse violentos los integrantes de esta organización, refiriéndose al cartel del Mar o cartel de la Totoaba, es que al día de la fecha se continúa con dicha práctica o conducta. Técnica de investigación en la que fueron expuestos diversos datos de prueba de los cuales por su relevancia se destacan las denuncias presentadas por el Director General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la comparecencia del representante de la organización sin fines de lucro Sea Shepherd Conservation Society; el oficio \*\*\*\*\* , de la declaración ministerial del testigo \*\*\*\*\* , parte policial \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , destacándose que el órgano jurisdiccional consideró suficiente los indicios para considerar que las líneas a intervenir, en este caso números telefónicos, eran utilizados por integrantes de la organización criminal dedicada a la pesca de tráfico y comercialización de la Totoaba macdonaldi, conocida comúnmente como Totoaba. Dicha técnica de investigación fue autorizada para concluir el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Posteriormente también se cuenta como dato de prueba con la copia de la autorización de prórroga de la intervención de comunicaciones privadas con número de expediente \*\*\*\*\* , en la cual para justificar la procedencia de la prórroga se expusieron como datos de prueba diversas transcripciones de las escuchas y resultado que se obtuvo de la intervención de comunicaciones privadas, señalando que los interlocutores en diversos eventos hicieron referencia a material bélico que pudiera ser utilizado para llevar a cabo sus actividades delictivas, filetes de Totoaba, Totoaba ahumada, mostrando los interlocutores asombro en la reducción en el número de vaquitas marinas que hay actualmente, técnica de investigación que fue prorrogada sesenta días para concluir el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (minuto 56:29, video 1 parte 2).

40 Mediante el cual entre otras cosas, refiere que de acuerdo con las fuentes consultadas en julio de 2018, la Organización \*\*\*\*\* por sus iniciales \*\*\*, dio a conocer los resultados de una investigación encubierta realizada durante catorce meses, denominada operación \*\*\*\* en la que muestra la composición, ubicación y modus operandi de los cárteles de la Toba conformados por mafia China y crimen organizado mexicano, el reporte final estableció que los \*\*\*\*\* están compuestos por peligrosos delincuentes mexicanos y narcotraficantes en Baja California, las comunidades pesqueras de San Felipe y Santa Clara, comerciantes y empresarios chinos, principalmente con base en Tijuana y en Mexicali, de acuerdo con la operación \*\*\*\*, está involucrada una persona apodada como el \*\*\*\* que está involucrado con una organización de la droga de Tijuana y le pagaba regularmente para poder transportar las vejigas natatorias, conocidas como buches de Toba, a través de las rutas que los controlan. También refiere que es relevante, que la \*\*\*\*\* con \*\*\*\* sugiere que desde la detención del primero, el segundo tomó las riendas como principal lugarteniente de la

● Oficio con terminación \*\*\*\*\* de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, signado por el suboficial de la Policía Federal Ministerial, José Guadalupe Ballesteros Yescas, mediante el cual informó en relación a la inspección de la libreta marcada con el indicio número tres.<sup>41</sup>

Una vez precisados y analizados los datos de prueba que expuso el Fiscal de la Federación, quien resuelve considera que la Magistrada responsable de forma correcta estableció que dichos datos de prueba, que fueron valorados por el juez de Control al tenor de lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera conjunta, integral y armónica, válidamente le permitieron considerar que son idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito de **delincuencia organizada**, en su modalidad de **cometer delitos contra el medio ambiente**, previsto en la fracción X del artículo 2, sancionado en el inciso b), de la fracción II, del numeral 4, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Ello, como destacó la Magistrada responsable, al quedar evidenciada la existencia de una organización criminal

pesca de Totoaba en San Felipe, sin embargo varios podrían ocupar el lugar \*\*\* actualmente preso en el Centro de Reinserción Social de Mexicali (minuto 01:13:57, video 1 parte 2).

<sup>41</sup> Que son dos libretas, pero en específico hace una inspección de la libreta, aclara que ese indicio tres, como lo refirió al principio de su deposición, fueron encontrados en el domicilio del ahora imputado, y para poder enfatizar se refiere a una libreta que tiene carátula con rayas de colores y las leyendas impresas \*\*\*\*\* y contiene 100 hojas, misma que al abrirlas se observa en su reverso lo que al parecer son tres números telefónicos escritos, siendo los siguientes: \*\*\*\*\* y el \*\*\*\*\* en su contraportada es de color blanco, en dicha libreta se contabilizan 43 hojas cuadrículadas con leyendas impresas de nombres y apodos de personas, citando cantidades diversas de dinero y de diferentes productos siendo algunos ejemplos los siguientes, \*\*\*\*\* dice una Leyenda, 100 \*\*\*\*\* dice 100 dólares, resto cuando venga, el siguiente dice \*\*\*\*\* 140 totis en fresca pack, marcar cuando esté listo para llevar pagado, también hay otro apodo que \*\*\*\*\* que dice 50 buche para el sábado en la noche, \*\*\*\*\* no abona pagar en la entrega, llevarles 200 m fresnos primera sección \*\*\*\*\* dice 90 y tot, abona 10 doll, después \*\*\*\*\* dice recibió 120 totis. 5 de febrero restan 1200 verdes, \*\*\*\*\* dice que se lleva 170 botis abona 5.0 ver. 23 de abril de 2021, también habla de otro apodo o nombre que es \*\*\*\*\* pago 90 tot, diez mil verdes abril 2021, \*\*\*\*\* dice vino por 220, dice viene mañana a pagar deja 5000 \*\*\*\*\* dice 20 tot fres pagado; otro nombre que es \*\*\*\*\* debe el último encargo paga cuando regresa se lleva 140 debía 80, asimismo refiere otras cantidades y nombre como \*\*\*\*\* Y \*\*\*\*\* habla de buches de Totoaba, habla de dólares de cantidades de 4000 dólares de 1200 dólares (minuto 01:16:40, video 1 parte 2).





denominada \*\*\*\*\* (integrada

por \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*

\*\* \*\*\*\*\* dedicada a cometer delitos contra el medio ambiente, principalmente a la pesca, tráfico y comercio de \*\*\*\*\* , conocida comúnmente como \*\*\*\*\* , especie endémica en veda total clasificada en la categoría de peligro de extinción y sujeta a protección especial, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana \*\*\*\*\* .

Sostuvo la Magistrada responsable, que tales datos de prueba revelan de manera indiciaria que el imputado, aquí quejoso pertenece a esa organización criminal al menos desde el dos mil dieciocho, realizando actos de pesca furtiva y comercio de buche de totoaba desde su domicilio ubicado en Calle \*\*\*  
\*\*\*\*\* Número \*\*\*\*\* en el municipio de \*\*\* \*\*\*\*\* , \*\*\*\*  
\*\*\*\*\* , México, con coordenadas geo referenciales latitud  
\*\*\*\*\* , longitud \*\*\*\*\* ; siendo su intervención como autor directo, esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; asimismo, a título doloso, acorde a los artículos 7, 8 y 9 todos del Código Penal Federal.

Así también, la Magistrada responsable concluyó que el Juez de Control sí ponderó debidamente los datos de prueba verbalizados por el fiscal federal, sometidos a los principios de contradicción e igualdad de las partes, bajo el estándar probatorio requerido para la etapa examinada, para concluir, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se acreditó el hecho que la ley señala como delito de **delincuencia organizada**, en su modalidad de **cometer delitos contra el medio ambiente**, previsto en la fracción X del artículo 2, sancionado en el inciso b), de la fracción II, del numeral 4, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; cometidos



De lo anterior se aprecia, que contrario a lo que sostiene el quejoso, la responsable sí efectuó un análisis y expuso las consideraciones por las cuales estimó, que fue correcta la determinación del Juez de Control al establecer que con los datos de prueba que expuso el Fiscal de la Federación, \*\*\*\*\* , de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, acta circunstanciada de cateo, informe policial rendido por parte de la Policía Federal Ministerial, oficio \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, oficio \*\*\*\*\* de fecha treinta y uno de julio de ese año, copia de técnica de investigación de intervención de comunicaciones privadas número \*\*\*\*\* , técnica de investigación, oficio \*\*\*\*\* , de uno de agosto de dos mil veintiuno y oficio terminación \*\*\*\*\* , de treinta y uno de julio de la indicada anualidad, se acredita el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada, así como el elemento de pertenencia de dicho antisocial, **ello al haber llevado a cabo adecuadamente el ejercicio de ponderación de dichos datos de prueba, para estimar de manera razonable que se cometió el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada;** de ahí que se reitera lo infundado de los conceptos de violación sintetizados en los incisos **b) y e).**

<sup>42</sup> La resolución que ahora se combate resulta violatoria de derechos humanos de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales, toda vez que la misma resulta incongruente en relación con los planteamientos que se hicieron en el escrito de apelación y los datos de prueba que fueron expuestos en la audiencia inicial, ello en virtud de que en la página ciento trece cuando la responsable se refiere a los testigos colaboradores confunde el argumento que se planteó en los agravios respecto a que dichos testigos, pues su contestación al agravio se centra en la circunstancia de si personas con identidad reservada pueden o no declarar, y en su caso si estas deben ser identificadas.



argumentos para combatir el dicho de los testigos colaboradores.

A fin de sustentar lo infundado del concepto de violación que se atiende, es necesario destacar los motivos que expuso la Magistrada responsable en la resolución reclamada, al dar contestación al tercer agravio que le formuló el imputado, aquí quejoso, al tenor de lo siguiente:

La Magistrada responsable calificó de infundados los agravios expresados por la defensa relativos a que el fiscal en su momento, si bien, hizo referencia al contenido de la declaración de los testigos colaboradores identificados como \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , lo cierto era, que al momento de la valoración el juez de Control no hizo referencia concreta al contenido de su declaración que fue leída en audiencia por la Fiscalía; que no obstante la falta de valoración, la Fiscalía y en su caso el Juez de Control no dieron contestación puntual al argumento de la defensa, en el sentido de que no se cuenta con los datos para poder identificar quién elaboró dicho escrito en donde obra la declaración de los citados colaboradores, pese a haber propuesto como acto de investigación una prueba pericial en grafoscopía a cargo de personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, acto de investigación que no fue admitido por el representante social.

Además, la Magistrada responsable destacó lo que verbalizó el Fiscal de la Federación en su derecho de réplica,

Sin embargo, en los agravios de apelación en ningún momento se planteó que la ilegalidad de la resolución recurrida provenía del hecho de no estar identificados los testigos, sino que quienes no estaban identificados eran las personas que recabaron dichas entrevistas, lo cual era un requisito que imponía el artículo 217, Código Nacional de Procedimientos Penales, y que al incumplirlo, dichos testimonios no debían tomarse en cuenta, pues no se tenía certeza de que dichos testimonios efectivamente se rindieron (aunque fuera con identidad reservada), ya que si no se identifica al servidor público que los realizó, el lugar, y la fecha, no se tiene certeza de su existencia.

Además, indica que le causa afectación dicha determinación toda vez que la responsable indicó que en esa fase procesal no se puede determinar si lo que señalaron los testigos colaboradores es correcto o no, que ello es materia en todo caso del desahogo de las pruebas en juicio, y que para dicha fase procesal, únicamente se asigna o niega valor probatorio dependiendo si esos datos resultan lógicos, congruentes, pertinentes y suficientes, como así aconteció en la especie; sin embargo, no señala dichas circunstancias en la resolución que se reclama; sin que baste referirse a los dichos de los testigos genéricamente para estimar colmada dicha exigencia de fundamentación.

También, la Magistrada responsable transcribió el contenido del artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y enseguida, estableció que el agente del Ministerio Público de la Federación está facultado por la norma especial para recibir el testimonio de las personas que depongan contra algún miembro de la delincuencia organizada; e incluso, lo faculta para dictar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad.

Destacó la responsable, que cuando se está frente a antisociales cometidos por miembros de la delincuencia organizada, dada la naturaleza de la conducta delictiva, el grave peligro al que se somete a la sociedad, la investigación y persecución de los delitos, así como la impartición de justicia, se encuentran normados por un régimen especial de excepción,





donde las reglas genéricas sustantivas y procesales que rigen la delincuencia convencional, no cobran aplicación, pues tal ilícito tiene características tan graves y complejas que los testigos, en estricto sentido o bien, los coimputados, se convierten en una piedra angular para una investigación y un enjuiciamiento eficaces; de ahí, que el sistema jurídico penal creó normas especializadas en la materia que rigen la recepción, desahogo y valoración de las pruebas, y de manera destacada, la de los testigos o coprocesados.

Señaló que ello era así, ya que el hecho de que un deponente pueda cooperar con las investigaciones o prestar testimonio en un marco judicial, puede poner en peligro su vida o la de su familia, por lo cual, además de brindar todas las circunstancias necesarias para preservar su seguridad, el Estado Mexicano ha privilegiado la necesidad de recabar con inmediatez sus exposiciones, lo que implica que deba llevarse a cabo ante el Ministerio Público de la Federación.

Indicó la Magistrada responsable, que con apego a derecho el Juez de Control estimó que la narrativa de los testigos colaboradores, la fiscalía si bien hace referencia al dato de prueba relativo al antecedente de investigación con que se cuenta, lo cierto es que en esa fase procesal no se puede determinar si lo que señalan dichos testigos colaboradores es correcto o no, que ello es materia en todo caso del desahogo de las pruebas en juicio, pero no para dicha fase procesal, donde únicamente se asigna o niega valor probatorio dependiendo si esos datos resultan lógicos, congruentes, pertinentes y suficientes, como así aconteció en la especie.

Finalmente, la Magistrada responsable señaló que aun cuando, como lo mencionó el inconforme en sus agravios, no se requiere de prueba plena para acreditar la existencia de una

\*\*\*\*\* \*\*\* \*\* \* \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\*\*\*\* , tomando en cuenta los argumentos que le planteó la defensa.

Por ello como se indicó, es **infundado** el concepto de violación sintetizado en el **inciso f)**.

para suplir la deficiencia de la queja<sup>43</sup>, **se niega al quejoso**

<sup>43</sup> Tiene aplicación en este aspecto, la jurisprudencia 67/2017, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, rubro: 2014703 que dice: **SUPLENCIA DE LA QUEJEA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)**. La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada.



\*\*\*\* \*\*\*\*\* la protección constitucional

solicitada.

Finalmente, es oportuno precisar que las tesis que se citan en esta determinación, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta.

**SÉPTIMA. Publicación de datos personales.** De conformidad con las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información, la presente resolución debe ser publicada con supresión de datos personales, de conformidad con el artículo 3, fracción IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, salvo los casos de excepción que prevé la ley de la materia.

**OCTAVA. Relevancia documental.** Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este asunto no es de relevancia documental, pues no se coloca en ninguno de los supuestos señalados en el precepto 15 de la propia normativa.

consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplicia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.



\*\*\*\*\* , se encuentra privado de la libertad en el **Centro de Reinserción Social, en Mexicali, Baja California**; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Mexicali, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, encomiende notificar personalmente al quejoso, el contenido de esta resolución, corriéndole traslado con copia certificada de la misma y en su momento, devuelva el exhorto de que se trata por la misma vía, con las actuaciones respectivas a este tribunal.

## RESOLVE:

**SEGUNDO.** Es pública la información contenida en la presente resolución, con excepción de los datos personales incluidos en la misma, de acuerdo a lo señalado en la consideración **séptima** de esta resolución.



**TERCERO.** El presente asunto no se considera de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en la consideración **octava** de la presente determinación.

**CUARTO.** Gírese vía electrónica atento despacho al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Mexicali, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, encomiende notificar personalmente al quejoso, de acuerdo a lo señalado en la consideración **novena** de esta resolución.

Notifíquese como legalmente corresponda, publíquese y anótese en el libro de registro y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); expídanse las copias necesarias con testimonio de esta resolución; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente.

Así lo resolvió y firma la Magistrada instructora del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, **Matilde del Carmen González Barbosa**, ante la secretaria de tribunal **Verónica Lizbeth Aguayo Gómez Tello**, quien autoriza y da fe, el día de hoy **veintidós de marzo de dos mil veintitrés**, que lo permitieron las labores del Tribunal.

M'MCGB/S`VLAGT/

Se hace constar que la presente foja, así como las firmas estampadas en ella, corresponden a la última parte de la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el amparo indirecto 14/2022 (anterior 18/2021-2TUC). Conste.-



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:  
47605557\_4360000031272322009.p7m  
Autoridad Certificadora:  
AUTORIDAD CERTIFICADORA  
Firmante(s): 2

FIRMANTE					
Nombre:	VERONICA LIZBETH AGUAYO GOMEZ TELLO		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.36.36.31.36.34.34		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	22/03/23 21:37:39 - 22/03/23 15:37:39		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	40 8f ed 14 e9 4e 44 9d 92 ce d4 0d 74 37 35 4f dc 1d 8f 81 a8 ee 7c d5 2b 38 20 fd 75 15 f7 84 9b 43 47 9d 30 cf 7e 1a 33 3e ad 02 de ad ff 3e f4 fe fb cf 4f 37 72 a8 d1 f7 37 40 98 9a ff ff 5a 51 3d 61 8d 8a 5d 92 c8 83 93 32 d1 96 43 a7 56 b2 51 5c 65 51 db 8b d0 c0 04 39 dd 9c fe 7d ef 5c 7d b9 d2 39 94 48 4e 17 10 f8 9c 61 19 32 10 75 27 63 07 84 1c 92 2c 75 4d d8 c2 44 6f 05 98 8d 53 8d f2 c9 6b 70 16 40 e4 53 a0 63 ba f9 f4 6a 5f 67 01 33 9b d5 e2 d1 88 77 81 a2 26 08 53 7b e7 7b 0e e2 64 81 bc 91 c5 2c a4 e0 aa e1 3e 30 aa a8 36 1a 97 93 c0 dd 3f 64 da e1 37 d4 6c 5f 57 a9 23 76 5b d0 16 94 b6 c5 8a dc 1e 1f d5 5f 56 e4 6e 13 2a 84 2d f3 d5 5f 8b 7e 47 74 92 fa 4a ef 81 87 60 4d d8 d9 21 ce 6a ae a5 28 46 5d 94 4b 93 69 ef dd 03 84 bc d9 78 24 82 d1				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	22/03/23 21:37:27 - 22/03/23 15:37:27				
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP SAT				
Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA				
Número de serie:	30.30.30.30.31.30.38.38.38.38.38.30.30.30.30.30.33.39				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	22/03/23 21:37:40 - 22/03/23 15:37:40				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	55047831				
Datos estampillados:	+SGOXBqvgvtlvaeEISzngaBXtek=				





## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	MATILDE DEL CARMEN GONZALEZ BARBOSA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.01.49.7f	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	22/03/23 22:21:40 - 22/03/23 16:21:40	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	84 6e 68 08 dc 18 60 22 18 d3 28 cd 38 e5 30 f7 6b db 1e f6 bb af 0b ea 59 c8 b0 ef 5f 84 9a 43 64 a3 09 3f b8 42 7e f0 43 f3 31 70 67 f6 12 e4 cf 46 bb 48 3a 0f 49 db 5c 96 cc a5 a0 bb 97 4c 47 57 03 3d 83 de d5 0a 09 5d 8c 93 0d 74 7d 73 88 16 fd 11 00 77 81 20 b9 6b 30 fb b2 42 db 47 4e ec f7 9f bb 7a c8 0a 07 70 19 46 4d 55 b6 23 9b d6 4c 05 68 86 3d 61 bc be 06 40 f9 6e b8 73 64 1a ee db 44 87 1e d1 88 c8 54 8e c3 05 2c 95 95 ee 53 7c d8 5c d2 06 b1 a9 30 aa 14 5d ba 93 dc af a6 d6 52 ca a2 de 73 24 5b 30 26 c1 1d 14 e3 49 56 65 74 9b 1b 62 42 5d 6f f8 42 88 a6 5a 13 1d f0 67 9f 6c 57 ba 68 47 10 22 b4 90 45 cf 48 90 4b 90 dc 62 82 c2 44 9f 8c f1 04 10 34 f8 cd 96 c2 4f 14 fe 9a 6e 39 e0 15 ae 36 61 6e 28 12 5a 6a fd 7c d1 d2 16 58 6b 51 e8 94 b6 ca bc			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	22/03/23 22:21:40 - 22/03/23 16:21:40			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	22/03/23 22:21:41 - 22/03/23 16:21:41			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	55076180			
Datos estampillados:	Qfzp4P2jy8NgntfSjCeeZMNU3I=			

El veintidos de marzo de dos mil veintitres, la licenciada Verónica Lizbeth Aguayo Gómez Tello, Secretario(a), con adscripción en el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de Datos personales de personas identificables.. Conste.